

LA "FUERZA PÚBLICA" EN EL ESTADO DE DERECHO.

Este Boletín recoge en su mayor parte, el tema del Seminario Internacional: "Doctrina y Gestión de las Políticas de Defensa, de Seguridad pública y ciudadana en el Estado de Derecho", realizado en Quito entre el 24 y 25 de noviembre y organizado por la Fundación DSD, el Programa Relaciones Civil-Militares, PUCE y la Fundación Konrad Adenauer. El Seminario tuvo la intención de iniciar y fomentar una reflexión necesaria sobre las diferencias entre Fuerzas Armadas y Policía, en cuanto a su naturaleza, doctrinas, misiones, posicionamiento en el Estado de Derecho y las consecuencias prácticas que pueden derivarse en problemas propios de la organización institucional respectiva, de las políticas públicas que generan y de las relaciones específicas que mantienen con la sociedad civil.

En el Ecuador y posiblemente en toda América latina, estas diferencias no están lo suficientemente claras. Se discute incluso la pertinencia de agrupar a FFAA y Policía bajo el concepto de "fuerza pública" sin medir las consecuencias teóricas y prácticas. Muchas confusiones fueron alentadas durante las experiencias particulares y particularizadas de la Guerra Fría vividas en nuestros países. La desconfianza derivada de las disputas interestatales hasta fines del s. XX influyeron en las concepciones sobre las fuerzas. Esos elementos impregnaron los cuerpos constitucionales y legales estas instituciones. La Constitución ecuatoriana, por ejemplo, asume a la Policía como "fuerza auxiliar de las FF.AA". Si bien textualmente el Art. 183 dice que lo es para "efectos de la defensa del país", en la práctica la mencionada auxiliaridad se ha extendido como la idea de una suerte de "subordinación" generalizada de la Policía respecto de las FF.AA, y, consecuentemente, ha influido en el manejo distorsionado de las políticas públicas pertinentes, en el mantenimiento de misiones que no corresponden, cuando no de la mala utilización de estas instituciones por parte de los gobiernos. Todo lo cual no contribuye sino a debilitarlas sistemáticamente.

CONTENIDO

EDITORIAL

La "Fuerza Pública" en el Estado de Derecho **Pag. 1**

LA DEFENSA Y LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA; PROBLEMAS DE LA TRANSICIÓN.

Raúl Benítez Manaut **Pag. 2**

"DOCTRINA Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DEFENSA, DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA EN EL ESTADO DE DERECHO".

Notas del Seminario Internacional **Pag. 3**

UNA NUEVA LEY ORGÁNICA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR.

Juan Carlos Rueda Montenegro **Pag. 4**

ACTIVIDAD DEL CONGRESO ECUATORIANO EN LOS TEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN EL PERÍODO Enero 2003/Enero 2005 **Pag. 5**

ECOS DE LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA **Pag. 6**

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA.

Enero-Febrero 2005 **Pag. 7**

SITUACIÓN DE LA DELINCUENCIA A NIVEL NACIONAL. **Pag. 8**

LA DEFENSA Y LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA. PROBLEMAS DE LA TRANSICIÓN.

Raúl Benítez Manaut*

La historia política de América latina está estrechamente vinculada a las fuerzas armadas. Fueron las primeras y principales estructuras de los nuevos Estados-nación a partir de 1820, y los caudillos que encabezaron la independencia se auto-identificaron como líderes militares y políticos. Después de la independencia, las pugnas internas (entre liberales y conservadores) y externas (principalmente con los vecinos, por la definición de las fronteras) llevaron a los ejércitos a ser los principales actores políticos. La evolución del Estado y la participación en él de las "fuerzas emergentes" (como los empresarios, los sectores medios y las clases populares), durante la primera mitad del siglo XX también repercutió en las instituciones castrenses. En términos generales, se puede periodizar la historia político-militar de América Latina de la siguiente manera:

- 1) Periodo fundacional. Se caracteriza por las guerras de independencia y el nacimiento de los Estados-nación (1810-1830).
- 2) Periodo de guerras civiles entre liberales y conservadores y de nacimiento de las estructuras gubernamentales (1831-1880).
- 3) Consolidación del Estado-nación liberal-oligárquico (1881-1930).
- 4) Primera democratización e incorporación de las masas a la vida política: populismo (1930-1964).
- 5) Militarismo institucional de seguridad nacional (1964-1983).
- 6) Redemocratización y reconversión militar (1983-...).

Los gobiernos militares instaurados en los sesenta y setenta del siglo XX, en lo que respecta a la relación cívico-militar, otorgaron fueros y leyes de excepción, limitando las libertades políticas y civiles. Brian Loveman enlista las siguientes características:

- 1) Se emiten leyes de excepción, la mayoría bajo la modalidad de decretos ejecutivos de gobiernos, sin participación del poder legislativo;
- 2) Se prohíbe al poder judicial proteger las libertades civiles, durante el régimen de excepción o bajo leyes de "seguridad nacional".
- 3) Hay una definición explícita de seguridad interna y del rol político de las FF.AA, que les otorga autonomía y el derecho de ser "garantes de la seguridad de la nación".
- 4) Hay una legislación de seguridad que criminaliza formas de oposición política.
- 5) Control de los medios de comunicación por motivo de seguridad nacional.
- 6) Códigos criminales especiales que asimilan crímenes políticos como crímenes contra el Estado.
- 7) Aplicación de la justicia militar a civiles.
- 8) Restricción o exclusión de los militares impidiendo ser juzgados en cortes civiles.
- 9) Expansión de la representación formal de los militares en la administración pública, (para supervisar el presupuesto, lugares preasignados en el Congreso, los poderes judiciales, agencias del gobierno y empresas públicas).
- 10) Autonomía para la asignación del presupuesto de las fuerzas armadas.

11) Autonomía del sistema educativo militar de los ministerios de educación.

12) Autonomía del sistema de justicia militar del sistema de justicia civil.

13) Autonomía en el sistema de ascensos.

Esta "autonomía militar", se define por débiles controles por parte de la civilidad, y por niveles crecientes de corporativización institucional. Estos elementos condicionan la transición a la democracia. Cuando se producen los procesos de democratización, debido a que los gobiernos emergentes no cuentan con capacidades legales y políticas para controlar a las instituciones castrenses, estos fueros son una de las principales limitantes de los procesos de transición, siendo uno de los principales desafíos de las democracias poder controlar políticamente este "poder real".

Entre los principales paradigmas de los regímenes democráticos maduros es que la estabilidad política genera también relaciones entre civiles y militares profesionales y de subordinación. Sin embargo, en América Latina las democracias son jóvenes e inestables, lo que deriva en gobernantes electos por medios democráticos, pero que gobiernan sus países con numerosas amenazas a la estabilidad, lo que impide que el Estado evolucione en el sentido de la reforma de numerosos sectores, entre ellos el de defensa y seguridad.

El principal desafío que presentan las instituciones castrenses latinoamericanas es el poder enfrentar con éxito la doble profesionalización: a) política, aceptando la subordinación y la conducción civil, y b) institucional, adaptando las nuevas estrategias organizacionales de las FF.AA modernas y abandonando numerosas misiones internas que distorsionan su naturaleza profesional, predominantes durante el siglo XX en casi todos los países. Por ello el desafío es doble, pues con un gobierno débil es imposible echar a andar una reforma militar. Y con gobiernos frágiles, los militares luchan por defender los privilegios y fueros que se auto-otorgaron durante los siglos XIX y XX.

A lo anterior se agrega un ambiente internacional de gran inestabilidad, principalmente después del 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas a Estados Unidos han generado un contexto de "guerra mundial", donde el ejército más poderoso del planeta busca la solidaridad de las fuerzas armadas del mundo a su causa. Debido a lo anterior, muchas estructuras de los aparatos de seguridad y defensa de los países enfrentan este desafío, sea real o potencial. Sea por que efectivamente operan grupos terroristas, o hay indicios de que pueden hacerlo, o también por la hipótesis de que el nuevo terrorismo no respeta fronteras y que tarde o temprano, aun países que se han mantenido al margen del fenómeno, como los latinoamericanos, pueden llegar a ser afectados. Además, las presiones de Estados Unidos, producto de la profunda reforma a su sistema de seguridad nacional y defensa, basado en la nueva noción de "seguridad de la patria" (Homeland Security) y "ataque preventivo", lleva a muchas naciones a emprender también reformas en sus estructuras de seguridad y defensa, principalmente los llamados controles de fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos, además de modernizar todo el sistema de control de ciudadanía y migración en prácticamente todos los países.

La guerra al terrorismo es básicamente responsabilidad civil, principalmente la emprenden servicios de inteligencia, cuerpos de seguridad y policíacos, y sistemas de información migratoria; ello no obsta para que las FF.AA incorporen este enemigo a su agenda de amenazas, y se preparen para ello. En América Latina existe un terrorismo "real" en Colombia y en menor medida en Perú, y un terrorismo "hipotético", el islámico, que ha actuado en contadas ocasiones como en Argentina. Sin embargo, está en la agenda de los ministerios de defensa y fuerzas armadas, a pesar de que muchos países tratan de que la "agenda latinoamericana", basada en la Declaración sobre Seguridad Hemisférica (México, 28 de octubre de 2003), sea la que determine el establecimiento de prioridades.

Pese a lo anterior, se mezclan agendas de defensa del siglo XX, con nuevas amenazas, pero también la organización, estructura, doctrinas, legislación, tradiciones, hipótesis de guerra de las fuerzas armadas de la mayoría de los países del continente responden a las agendas del pasado, que a las presentes o futuras. Modernizar las agendas de defensa, y modernizar su relación con el aparato civil del Estado, en consonancia con los procesos de democratización y globalización es el reto pendiente de las fuerzas armadas.

* Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. UNAM-México

"DOCTRINA Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DEFENSA, DE SEGURIDAD PÚBLICA y CIUDADANA EN EL ESTADO DE DERECHO"

El Seminario internacional sobre este tema se desarrolló en Quito, Swiss Hotel en los días 24 y 25 de noviembre de 2004. Organizado por la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa, el Programa Relaciones Civil-Militares de la PUCE y la Fundación Konrad Adenauer, con auspicio del Congreso Nacional.

Sobre el tema "**Políticas de Defensa y de Seguridad Pública en Democracias Estables**", **Torsten Stein** (Alemania) analizó los principios conceptuales del monopolio legítimo de la violencia, transferido al Estado por las constituciones democráticas. "Un Estado debe realizar la función de proteger, sin violar más derechos de los que protege". Una democracia estable debe encontrar un punto de equilibrio, para garantizar una amplia seguridad con la máxima libertad posible. **Hal Klepack** (Canadá): la estabilidad de una democracia proviene de la legitimidad y la confianza pública "para que en tiempos de paz y con paz interna pueda haber justicia". La confianza viene de que el Estado haga lo que dice que va a hacer, no sea visto como abusador y explotador y de que exista "rendición de cuentas". El desafío es controlar a las FF.AA y usarlas debidamente "para que no lleguen a ser tan fuertes en lo político que causen problemas en lugar de resolverlos". En Canadá, el Parlamento ejerce riguroso control de los asuntos de la defensa y seguridad, frente a un público interesado - prensa, academia, clase política. La Policía Montada tiene total control de la seguridad interna.

Sobre el tema "**Doctrinas y Gestión Democrática de la Seguridad Ciudadana y Política Policial**" **Leticia Salomón** (Honduras) dijo que en Centroamérica la Guerra Fría concentró las funciones de defensa nacional y de seguridad pública o ciudadana en las Fuerzas Armadas, implicó a los militares en funciones policiales y a los policías en funciones militares, dentro de un débil Estado de Derecho. Al finalizar la Guerra Fría se fortalecieron los procesos de paz y de transición a la democracia. Con ello el control civil sobre las instituciones de defensa y de seguridad; la separación institucional y funcional entre fuerzas militares y fuerzas policiales. Es necesario, un abordaje integral de todo el circuito de la justicia, tanto en recursos humanos como financieros. **Vladimiro Álvarez** (Ecuador) "No debe distraerse -dijo- a las fuerzas de seguridad de su misión específica. Los acontecimientos internacionales de los últimos tiempos, así como nuestra situación actual en la

frontera norte, exigen que tengamos criterios, parámetros y políticas aplicables en la guerra y en la paz. No podemos ni debemos participar en conflictos ajenos. Pero debemos tener un plan propio de seguridad interna y externa, diseñado y ejecutado en pleno ejercicio de nuestra propia soberanía.

Sobre el tema "**Las doctrinas y políticas del sector defensa**". **Raúl Benítez Manaut** (México) recorrió el pensamiento clásico sobre fuerzas armadas en sociedades modernas: Alfred Vagts y Thomas Jefferson. Thomas Hobbes, Friedrich Hegel, Clausewitz y Alexis de Tocqueville. Benítez consideró que estos lineamientos teóricos, permiten interpretar las relaciones cívico-militares en América Latina, y propuso diversos "modelos de relaciones civil militares en transición hacia un manejo democrático". **Fernando Bustamante** (Ecuador): No hay que confundir la conducción democrática de la defensa con la "conducción civil". Es perfectamente posible que existan formas de gestión no democrática de la defensa, manejadas por civiles. En Ecuador, la desconfianza hacia las instituciones y una cultura cívica personalistas han hecho que muchos piensen que la responsabilidad de las FF.AA debe ser ante los "organismos" de la sociedad civil, y no ante las instituciones representativas. Las formas alternativas de participación ciudadana no deben reemplazar a las instituciones representativas. **Gustavo Suárez Pertierra** (España) se refirió a la transición política en España, partiendo de un régimen autoritario que nació de un golpe de estado, con la figura de un jefe del estado de profesión militar. Pero lo militar no constituyó la norma del tejido político-social de la dictadura. En la transición democrática el Ministerio de defensa tuvo un gran papel. Un problema muy serio es la falta de "profesionalización de los parlamentos para der capaces de analizar las cuestiones implicadas en las políticas que fiscalizan".

En el Tema: "**La militarización de la política criminológica en América latina**", **Juan Ramón Rodríguez** (Ecuador) dijo que en Latinoamérica, se ha dado preponderancia a la represión sobre la prevención. El sistema penal, en sus funciones preventiva y represiva, ha sido incapaz de garantizar la seguridad ciudadana ante el incremento de la criminalidad organizada y con enormes recursos financieros y tecnológicos. Frente a este panorama tenemos un código penal anclado en las realidades criminales del siglo XIX. **Juan Carlos Andrade** (Ecuador) analizó los factores de la militarización de las políticas

criminológicas 1) estados tradicionalmente débiles. 2) FF.AA tradicionalmente utilizadas para contener amenazas resultantes justamente de la falta de presencia del Estado. 3) sistemas jurídicos ineficientes. En América latina, a las situaciones de pobreza y marginalidad, sumamos Estados que operan bajo visiones conservadoras de la solución de los problemas. **Gaytán Villavicencio** (Ecuador) abogó por la distinción teórica y analítica de los conceptos de seguridad ciudadana, seguridad nacional y seguridad-defensa regional y hemisférica, especialmente luego del 11 de Septiembre en USA. En función del combate global al terrorismo y narcotráfico se ha producido un "discurso único" que integra lo hemisférico, lo regional y lo defensivo nacional con la seguridad ciudadana. La frontera entre las funciones de defensa y las del orden público se han hecho porosas, frente a grandes vacíos jurídicos.

El último panel del Seminario enfocó el tema: **"Estructuras de seguridad en el Estado de derecho; sistemas de inteligencia, información y justicia"**. **Hugo Palma** analizó lo ocurrido en Perú con el SIN y los intentos del Congreso, en la etapa post Fujimori. "Como actividad humana, dijo- la inteligencia es falible y trae riesgos como: la dificultad de los

agentes para interpretar correctamente los datos y la posibilidad de acomodarlos a la propia visión política. La tarea de la inteligencia -enfatisa- no es definir la política de seguridad ni reemplazar las definiciones políticas sobre las grandes orientaciones nacionales. Tan solo debe presentar información al proceso de toma de decisión en materias relevantes para la seguridad y la supervivencia del Estado de Derecho y no del gobierno. Por eso es "estratégica". **Ciro Alegría**: El policía no puede operar en una sociedad donde no existe la conciencia de la igualdad de derechos entre las personas (donde no existe sociedad civil). Los militares, en cambio, sí pueden hacerlo, pues en situación de guerra están suspendidos todos los derechos, salvo los humanitarios. Se debe reducir al máximo las misiones militares en seguridad interna. **Arturo Donoso**: Hay que evitar por todos los medios que la Policía se militarice. Existen peligros de abuso de poder por parte de la fuerza pública pues la tecnología ha logrado perfeccionar las armas disuasivas (de uso policial y letales (de uso militar). Es imperativo que las autoridades civiles tanto del Ejecutivo, como del Legislativo, pero en especial la Fiscalía y de la Función Judicial, controlen celosa y puntualmente las acciones de la fuerza pública.

UNA NUEVA LEY ORGÁNICA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR.

Juan Carlos Rueda Montenegro*

La Policía Nacional del Ecuador se encuentra en estos días frente a un dinámico proceso de cambio institucional, para sintonizarse con las demandas que provienen de los cambios sociales y políticos en el inicio de un nuevo siglo. Los parámetros que marcaron el comportamiento y la personalidad institucional durante las últimas décadas, encasillaron su quehacer en las doctrinas imperantes de la Seguridad Nacional. Esa ideología se instrumentalizó a través del sistema educativo y consolidó modelo policial ajeno a la verdadera naturaleza de la institución y a su misión en el ámbito de la seguridad pública y ciudadana.

Se justificó ese modelo - con o sin razón - en las amenazas exacerbadas que se cernían sobre los sistemas políticos liberales de occidente, por parte de las corrientes totalitarias con referentes en los gobiernos de inclinación fascista o en los de corte comunista. Pero el desarrollo político de la civilización evidenció el fracaso de ambos experimentos, unos más temprano que los otros. En el otro extremo, se lograron desarrollar sistemas políticos con características más identificadas con el reconocimiento de los derechos y garantías fundamentales de los seres humanos, con sistemas de gobierno basados en la participación democrática como el instrumento por excelencia de la gestión política.

Los matices ideológicos determinaron que en muchos países, especialmente en América latina, se constituyeran instituciones de la defensa nacional, que extendieron su rol a los asuntos internos, caracterizando el escenario nacional como objeto de sus preocupaciones, más allá de sus naturales competencias. Este enfoque identificaba amenazas y sospechosos entre los propios ciudadanos que depositaban en las organizaciones de la defensa la responsabilidad de la integridad territorial. Ahora, a

la luz de esas ideas, esos mismos ciudadanos eran considerados sospechosos y peligrosos enemigos de la Patria y de la Nación.

Este modelo se consolidó en los regímenes dictatoriales y autoritarios, que instrumentalizaron para la seguridad interna todo el sistema institucional que debía servir para los fines de la defensa. Una de las instituciones que, por sus propias raíces de carácter militar, resultaron alineadas en ese marco fue precisamente la Policía. Sobre esas bases se constituyó la institución policial ecuatoriana, y así la encontramos al finalizar el siglo XX, con manifestaciones evidentes de una tergiversación interesada de su finalidad social, concebida para garantizar más que el orden público, la estabilidad y permanencia del Gobierno. El énfasis de las preocupaciones no declaradas, pero en la práctica asumidas, han sido las relacionadas con la integridad del aparato ejecutivo y especialmente de los órganos que representan el más alto nivel de la autoridad política, dejando en un segundo plano las funciones que caracterizan a la verdadera función policial.

El modelo fue perpetuado no solo por el influjo ideológico de una doctrina transmitida a través de los procesos de capacitación policial; también ha tenido referentes en las construcciones jurídicas constitucionales que integran bajo un mismo concepto (Fuerza Pública) a dos instituciones de diferente naturaleza, cuya gestión se ubica en ejes de gobierno definitivamente distintos. Es más, a la Policía se le determina un rol de fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas como si las características policiales complementaran las de aquellas. Esta confusión que el constituyente ha propiciado en la carta fundamental, se refleja en los instrumentos jurídicos menores que determinan la Ley Orgánica de la Policía Nacional y su Ley

de Personal. Estas leyes copian estructuras militares propias de la defensa, estados mayores, planas mayores, grados y honores militares, consejos de todo orden para administrar la discrecionalidad de la autoridad jerárquica legitimada por la antigüedad y el sistema vertical autocrático.

Debemos considerar que el modelo policial hegemónico y dogmático, fundamentado en el carácter militar, no es consecuente con las corrientes del pensamiento liberal que promueve el reconociendo de los derechos civiles y los derechos humanos, como elementos consubstanciales de la naturaleza humana, cuyo existencia no es el reconocimiento gracioso de Estado, sino que más bien este ha sido constituido para su promoción, para precautelarlos y defenderlos.

Con estas consideraciones, la policía nacional ecuatoriana ha implementado un "programa de modernización y transformación integral de la Policía para el siglo XXI" y bajo estos postulados se han concebido las nuevas directrices de su gestión, siguiendo celosamente las políticas del Gobierno Nacional, representados en la cartera de Gobierno y Policía. Pero no solo es necesario que se le hayan señalado a la Policía las políticas y directrices, sino que resulta imprescindible que se establezca una estructura orgánica y una ley de personal, que reflejen y viabilicen la verdadera función social de la Policía en el marco institucional del Estado Social de Derecho.

Con estos antecedentes la institución policial ha convocado en este último año a muchas voluntades profesionales, desde los más altos niveles de la Dirección Institucional de la Policía Nacional del Ecuador, la Escuela de Estado Mayor, la Dirección

de Planificación, la fundación Konrad Adenauer, la Agencia Interamericana para el Desarrollo AID - NAS, grupos académicos pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y en particular al Grupo de Apoyo constituido por miembros de la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa, junto con otros importantes aportes en el área de la capacitación masiva de los miembros policiales, para realizar conjuntamente un trabajo de reconstrucción organizacional.. Este no es sino el proyecto de construcción de lo que será la policía nacional en los próximos años, resultante también de la manifestación cívica de numerosos representantes de la sociedad civil, que confían en que el fortalecimiento institucional de la Policía es un ingrediente importante de la consolidación de la Democracia, del Estado de Derecho y de la nación ecuatoriana.

El referente empírico de este gran esfuerzo participativo, se ha plasmado en la implementación de cuatro Talleres de discusión de la Ley Orgánica de la Policía nacional, realizados durante febrero de este año. Para marzo está previsto un seminario internacional que pretende recoger la experiencia externa y la investigación especializada en los temas de la Seguridad Pública, su naturaleza, su integración en el sistema del Estado de Derecho, tendiendo los puentes hacia una nueva construcción institucional que se dibuja a las puertas de la Globalización.

***Licenciado en Criminología. Teniente Coronel de la Policía Nacional del Ecuador.**
Alumno de la Escuela de Estado Mayor.

ACTIVIDAD DEL CONGRESO ECUATORIANO EN LOS TEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN EL PERÍODO Enero 2003- Enero 2005

PROYECTOS DE LEY CONGRESO NACIONAL 2003 -2005				
FUERZA PÚBLICA				
CODIGO	CONTENIDO	AUSPICIANTE	TRAMITE	OBSERVACION
25-269	ORGANICA QUE ESTABLECE EL FUERO ESPECIAL DE LA FUERZA PUBLICA	RIVERA MOLINA RAMIRO - DP-UDC	Presentación	ENVIADO A LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
FUERZAS ARMADAS				
CODIGO	CONTENIDO	AUSPICIANTE	TRAMITE	OBSERVACION
23-814	REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL. (Art: 80)		Publicación	PUBLICADO EN EL R.O. No. 100 DE 06/10/2003.
23-842	SOBRE OBJECION DE CONCIENCIA PARA EL SERVICIO CIVIL COMUNITARIO	GONZALEZ ALBORNOZ CARLOS - ID	Segundo Debate	REGRESA A LA COMISION EL 08/26/2003
25-257	REFORMATORIA DE LA LEY DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. (Título V, Capítulo Unico, Art. 73)	TORRES LUIS FERNANDO- PSC, TORRES TORRES CARLOS - PSP	Distribución	EXTRACTO PUBLICADO EN R.O. N° 302 DE 03/29/ 2004.
25-262	REFORMATORIA A LA LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.	RIVERA MOLINA RAMIRO DP - UDC	Primer Debate	
25-270	ORGANICA DE LAS FUERZAS ARMADAS	RIVERA MOLINA RAMIRO DP-UDC	Presentación	ENVIADO A LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
POLICÍA NACIONAL				
CODIGO	CONTENIDO	AUSPICIANTE	TRAMITE	OBSERVACION
24-101	REFORMATORIA A LA LEY DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL.	DEL CIOppo ARAGUNDI PASCUAL - PSC	Distribución	EXTRACTO PUBLICADO EN R.O. No. 114 DE 06/30/2003.

SEGURIDAD CIUDADANA				
CÓDIGO	CONTENIDO	AUSPICIANTE	TRÁMITE	OBSERVACIÓN
23-734	DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.	LUCERO BOLAÑOS WILFRIDO - ID	Publicación	PUBLICADO EN EL R.O. No 130 DE 07/22/2003
23-937	REFORMATORIA A LA LEY DE FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS. (CAPITULO IV, DISPOSICION TRANSITORIA)	MORENO ROMERO HUGO DP	Publicación	PUBLICADO EN EL R.O. No. 77 DE 05/08/2003
24-031	REFORMATORIA A LA LEY DE SERVICIO CIVICO OBLIGATORIO AL AMPARO DE LAS FUERZAS ARMADAS.	BORBUA ESPINEL RENAN PSP	Distribución	EXTRACTO PUBLICADO EN EL R.O. No. 50 DE 03/28/ 2003
24-080	CREACION DEL CONSEJO CIVICO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA PROVINCIA DEL CARCHI	ORTIZ CARRANCO EDGAR GERARDO - PRIAN	Distribución	EXTRACTO PUBLICADO EN EL R.O. No. 101 DE 06/11/ 2003.

FUENTE

<http://www.congreso.gov.ec/pages/proyectos>

ECOS DE LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA SEGURIDAD Y DEFENSA.

La Fundación DSD, con auspicio de la PUCE, la Universidad San Francisco de Quito y la Fundación Konrad Adenauer, se encuentra colaborando con la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional, en el **Proyecto de análisis y reestructuración de la Ley Orgánica de la institución**. El Proyecto es parte del Plan de Modernización que impulsa la Policía. Desde el 20 de enero se han realizado cuatro Talleres, con el concurso de participantes civiles y policiales:

1. Análisis de la Ley Orgánica, doctrina y fundamentos de la función policial. Universidad Católica. 20 de enero, 2005. Se discutieron conceptos de seguridad y el posicionamiento de la Policía en las estructuras jurídicas del Estado.

2. Descentralización y Desconcentración. Escuela de Estado Mayor, Policía Nacional. 4 de febrero, 2005. La desconcentración del poder de decisión y de los recursos logísticos y económicos a nivel de los Distritos, permite un acercamiento positivo de la institución hacia la población

3. Análisis comparativo de las Leyes Orgánicas de las Policías chilena, española y peruana. Universidad San Francisco, 12 de febrero, 2005. Los Agregados policiales de las respectivas embajadas hicieron una exposición de la Ley Orgánica de la Policía de sus países, suscitando una animada discusión.

4. La Estructura institucional de Policía Nacional del Ecuador. Club de Oficiales, 18 de febrero, 2005. Conceptos como el de seguridad compartida, democrática, humana y ciudadana han colocado a la persona en el centro de las políticas de seguridad estatal. El cambio no solamente incluye un cambio estructural, sino una orientación básica hacia la legalidad de las funciones policiales.

CRONOLOGÍA SOCIEDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA.

1. SEGURIDAD PRIVADA EN LAS CALLES DE GUAYAQUIL

"La alcaldía de Guayaquil puso en marcha el segundo punto de su Plan 'Más Seguridad' que consistía en el uso de compañías de seguridad privada en puntos estratégicos de la ciudad. Las compañías LAAR, Seguiresa, Max Security y CCI serían las encargadas de vigilar, cada una, 10 puntos considerados de alta criminalidad. Andrés Roche, coordinador del Plan, dijo que la intención no es crear una policía autónoma, sino dar apoyo a la Policía Nacional" (El Comercio 02/12/04).

2. REACCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A PROYECTO DEL ALCALDE DE GUAYAQUIL.

"El comandante de la Policía, Jorge Poveda, señaló que no hacía falta "policía paralelas" y que los guardias privados no pueden actuar pues no están amparados por la ley. Pero el Acuerdo Alcalde-Policía había sido firmado por el general Rodrigo Hinojosa. (PN) en la alcaldía de Guayaquil (El Comercio 02/12/04). Expertos señalaron que un proyecto de participación de la seguridad privada en áreas exclusiva de la Policía Nacional requiere reformar las leyes. Lo único que hasta ahora se conoce de este plan es que una parte de los recursos saldrán del Cabildo y otra el sector productivo de la urbe (aproximadamente 1 300 000 dólares)" (El Comercio 03/12/04).

3. Tensión ENTRE ALCALDE DE GUAYAQUIL Y MINISTRO DE GOBIERNO.

"El tema de la participación de "policías privados" en la calles creó tensión entre el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el ministro de gobierno Jaime Damerval (Hoy 02/12/04). La iniciativa del Alcalde de Guayaquil recibió críticas. El Ministro de Gobierno señaló que gobierno debe comprobar que la gente que trabaje tenga la debida preparación para que no sea víctima de la delincuencia. Ese trabajo de control debe realizarlo la Policía y con ese informe él tomará una decisión. El Alcalde ha defendido su plan arguyendo disminución de los actos delictivos en los puntos vigilados (El Comercio 06/12/04) y su potestad de encargarse de la seguridad de la urbe" (Expreso de Guayaquil 07/12/04).

4. SUSPENSIÓN DE PROYECTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS CALLES.

Mediante resolución administrativa, el Ministro de Gobierno suspendió a las compañías de seguridad privada que funcionaban en Guayaquil, por transgredir el artículo 183 de la Constitución y la séptima disposición general de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada (Expreso de Guayaquil 14/12/04). El Tribunal Constitucional había sentenciado que: " las potestades de la Policía son inherentes a la función administrativa, su delegación no está permitida por la Constitución". El Ministro Damerval (gobierno) añadió que el pedido del Alcalde de Guayaquil configuraría un delito (Hoy 21/12/04).

5. ACTUACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

"La Municipalidad y los sectores productivos de Guayaquil cuestionaron la suspensión de las compañías de seguridad por parte del Ministro de Gobierno. Las Cámaras de la Industria, del Comercio, de la Pequeña Industria, de la Construcción, Asociación de Canales de Televisión, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y la Corporación PIA, dictaron una resolución que "si en 30 días no se permite reestablecer la seguridad en la urbe se convocará a una marcha cívica para demandar seguridad" (El Comercio 15/12/04).

6. POLICÍA Y FUERZAS ARMADAS EN LAS CALLES DE GUAYAQUIL.

"Miembros de Policía y FFAA custodian los lugares donde operaban las compañías de seguridad privada. El general Jorge Poveda, Comandante de la Policía, entregó 49 vehículos para la vigilancia de la ciudad. Anunció la llegada de 100 policías más y la colaboración de 540 militares y 150 miembros de la Comisión del Tránsito del Guayas en operativos que se mantendrán por tiempo indefinido (Expreso de Guayaquil 17/12/04). Señaló que poner vigilancia privada en las calles se explica "solo como un afán de lucro que quiere reportar utilidades con el déficit policial" (El Comercio 17/12/04).

7. ANUNCIO DE MARCHA POR SEGURIDAD CIUDADANA.

"El Alcalde Jaime Nebot anunció la realización de una marcha cívica, con el respaldo de la ciudad acerca del tema de la seguridad. Dijo que el proyecto no es político, pero no descartó su participación en las marchas convocadas en contra del gobierno. (Expreso de Guayaquil 07/01/05). El Comandante de la Policía hizo un llamado para que la marcha no se realice y se mantenga un ambiente de paz. Expresó la opinión del Consejo Ampliado de Generales de la Policía que está en contra del uso de guardias privados en espacios públicos. Recordaron que el código penal sanciona a quienes fingieren ser empleados públicos, con uno a cinco años de prisión. Jaime Nebot dijo que Poveda "no es la autoridad indicada para discutir el asunto" (Expreso de Guayaquil 14/01/05).

8. AUMENTO DE VIGILANCIA POLICIAL EN GUAYAQUIL.

"Paralelo a la organización de la marcha, los policías ofrecidos para reforzar la seguridad de la Guayaquil llegaban a Guayaquil. Este incremento de personal vigilará los 88 puestos PAI, 120 puntos del sector bancario y comercial, y los 40 sitios que eran custodiados por las compañías de seguridad privada (El Comercio 18/01/05). De los 1000 nuevos miembros 600 se quedarán en Guayaquil y 400 se distribuirán en el resto de la provincia. También se confirmó que llegarán 200 motos, 2 500 pistolas, 2 000 carabinas y 400 escopetas" (Expreso de Guayaquil 20/01/05).

SITUACIÓN DE LA DELINCUENCIA A NIVEL NACIONAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2004 (últimos datos)

TIPO DE DELITO	TOTAL	PORCENTAJE %	PROMEDIO
1) Contra la Propiedad	1202	45,98	133,56
2) Contra Personas	1079	41,28	119,89
3) Delitos Sexuales	112	4,28	12,44
4) Contra la Administración Pública	27	1,03	3
5) Contra la Segruidad Pública	10	0,38	1,11
6) Contra la Fe Pública	90	3,44	10
Otros	94	3,6	10,44
TOTAL	2614	100	290,44

COMPARACIÓN ANUAL

TIPO DE DELITO	1995		2000		2004		2005*	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1) Contra la Propiedad	13479	40,3	49054	53,3	47845	50,2	3912	45,9
2) Contra Personas	10515	31,4	19577	40,8	33269	34,9	3202	37,6
3) Delitos Sexuales	973	2,91	1257	2,62	2869	3,01	317	3,72
4) Contra la Administración Pública	*	*	152	0,32	279	0,29	32	0,38
5) Contra la Segruidad Pública	1289	3,85	83	0,17	4004	4,2	425	4,99
6) Contra la Fe Pública	293	0,88	5,96	1,24	1398	1,47	140	1,64
Otros	6933	20,7	6244	13	5608	5,89	496	2,82
TOTAL	33483	100	48030	100	95272	100	8524	100

* Solamente constan los datos del mes de enero

Referencia:

- 1) Abigeato, Abuso Confianza, Estafa, Extorsión, Destrucción Bienes, Hurtos, Robo Domicilio, Robo Carro, Robo Moto, Otros Robos.
2) Abandono Menor, Agresión Física, Asalto Bancos, Asalto Carretere, Asalto Comercio, Asalto, y Robo Vehículo, Desaparición de Personas, Homicidio, Intento Secuestro, Tenencia de Armas
3) Atentado Pudor/Acoso, Estupro, Intento Violación, Rapto, Trata de Blancas, Violaciones
4) Peculado, Rebelión y Atentado, Usurpación Funciones
5) Asociaciones Ilícita, Intimidación/Amenazas, Tenencia de Explosivos
6) Falsificación, Tenencia falsa de Documentos.

Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial.
Sección Estadísticas

CON AUSPICIO DE:



**BOLETÍN DEMOCRACIA,
SEGURIDAD, DEFENSA**

Comité Editorial
Bertha García Gallegos
Fernando Bustamante Ponce
Francisco Rhon Dávila
Juan Pablo Aguilar Andrade

Asesoramiento Internacional
Dr. Louis Goodman -American University (USA)
Dr. Gustavo Suárez Perterra - Instituto Gutiérrez Mellado
(España)

Investigación
José Castro Sotomayor
Relaciones Públicas
Inés Cevallos Breilh

**BOLETÍN DEMOCRACIA,
SEGURIDAD, DEFENSA**

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria
Universidad Católica. Torre 2, piso 9. Oficina 901
Teléfonos: (593-2) 299 182
(593-2) 256 5627 ext. 1124

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec
http://www.dsdpuce.org

Correspondencia y solicitud de ejemplares del boletín
jrcastro@puce.edu.ec